

Un gobierno para el desarrollo humano

Aniceto Rodríguez Arenas

CON el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Oficina Regional del Programa para el Desarrollo de la ONU, y el Senado de la República de Chile, se efectuó en diciembre último, en Valparaíso, un importante seminario para analizar el tema que sirve de título a este artículo, concurriendo líderes políticos y culturales de América Latina y el Caribe, representativos de una nueva generación dirigente que asume hoy o asumirá mañana responsabilidades de conducción en sus respectivos países. La reflexión central recogió la necesidad imperiosa de reubicar las políticas dirigidas en función directa del ser humano enfocándolo como eje principal de acciones públicas y privadas, como objetivo indispensable de programas solidarios y parte vital para el éxito de planes para gobernar un país y administrar a la comunidad social que allí vive, lucha y trabaja por su bienestar.

La reunión se concebía en el marco de "entrada de América Latina y el Caribe en el siglo XXI", estimulando especialmente a las generaciones jóvenes para que tomen conciencia de que es básico capacitarse para que con mentalidades maduras y crecientemente idóneas se afronten políticas de cambio en un mundo futuro que será más complejo aun que la década final del siglo XX.

Esta toma de conciencia adquiere especial relevancia en América Latina, área en que no se logran resultados más favorables en la consolidación del progreso, un afianzamiento vigoroso de la democracia y un negativo estado de pobreza para muchos millones de habitantes. Esto ocurre en un momento en que grandes globalidades de naciones se asocian para superar carencias y adoptan programas conjuntos para alcanzar objetivos ligados al bienestar material y cultural de sus poblaciones. Como lo dice un documento pertinente: "Después de quinientos años de un primer descubrimiento, el hombre se redescubre ahora a una nueva dimensión de universalidad. Es el habitante de una gran casa común, cimentada en profundas innovaciones tecnológicas y de las comunicaciones. Se abre un mañana de mayor libertad y proyección, que conlleva retos nuevos, especialmente en las zonas alejadas de los centros promotores del cambio. Ahora en cualquier confín del mundo, como un juego de espejos, cada quien puede mirar su miseria en la opulencia del otro, y su opresión en la libertad ajena. Esta consideración preside cualquier pensamiento sobre los ca-

minos del desarrollo. Ya no existen parcelas aisladas. El escenario es el mundo y los actores son hombres y pueblos libres".

Dicho informe señala también que el mundo se integra con las comunicaciones, pero a la vez se fractura por diferencias abismales en el desarrollo, por un orden económico mundial normado por "el grupo de los siete" países altamente industrializados, que representan a unos ochocientos millones de seres provistos de ingentes recursos infinitamente superiores a los cuatro mil millones del resto del universo. En treinta años se agudizan las diferencias, ya que entre 1960 y 1990 los ingresos del 20% más rico de la población mundial, que al comienzo era treinta veces superior a los del 20% más pobre, se ha duplicado ahora en sesenta veces. Aquellos países en que habita el 21% más rico de la población, generan el 83% del PNB internacional, mientras que América Latina, con su población aumentada, disminuye su participación del 7 al 4% en el comercio mundial y del 12 al 8% en la inversión extranjera directa. Intertanto los pobres de ciento doce millones de ayer suman ahora una masa de ciento ochenta y cuatro millones de personas.

No son ajenos a estos desniveles el pesado fardo de la deuda externa y la minusvalía de nuestros productos y materias primas en los mercados mundiales.

Tan golpeadora realidad ha obligado, a las instituciones mundiales que influyen en la economía de las naciones de menor desarrollo, a modificar sus políticas rígidas para compaginarlas con la urgencia del desarrollo social. Es un progreso leve, pero progreso al fin. Aquella situación determina demandas reiteradas de los países en desarrollo ante los organismos internacionales, y una relativa toma de conciencia mayor de los países industrializados que entienden que su propio bienestar depende en alguna medida de superar la pobreza y subdesarrollo de los pueblos ubicados en el traspatio mundial. Ello origina nuevas decisiones en la ONU, entre las cuales destaca la convocatoria a una Cumbre para el Desarrollo Social, propuesta por Chile, que, apoyada por unanimidad, permitirá realizarla próximamente.

Sin embargo, debemos poner el acento en lo que podemos hacer ahora nosotros mismos, gobernantes y gobernados de América Latina, para avanzar con políticas propias en pro del desarrollo económico y social. En esa dirección se han descartado políticas populistas que originan alivios

aparentes en las masas pero que generan en definitiva saldos negativos por la inflación, déficit fiscales, pérdida del ahorro interno e insolvencias para nuevas inversiones que originen más producción, más trabajo y más fortaleza económica. También es cierto que al aplicarse programas económicos rígidos, se olvida o soslaya el desamparo de contingentes humanos apreciables que, al permanecer en la marginalidad y pobreza, son caldo de cultivo para grandes conmociones carentes de contenido ideológico, que facilitan en algunos casos el camino hacia formas autoritarias de poder que no resuelven los problemas de fondo que motivaron esos reclamos colectivos.

Dicho seminario puso un acento especial para que las políticas internas de los países latinoamericanos compaginen tres cuestiones vitales entrelazadas entre sí: la modernización equilibrada de la economía, la democratización creciente de la sociedad y la superación de la pobreza.

Reemplazar marginalidad por participación

Superar la pobreza implica entender que no basta el crecimiento económico y que la gobernabilidad de los pueblos permanecerá en riesgo mientras no se lleven a la práctica políticas destinadas a superarla. Se accede corrientemente a políticas de subsidios para atenuar situaciones de pobreza, pero ellas tienen el defecto de su temporalidad y asumen un sentido paternalista y clientelar. El problema radica en cómo contribuir al mejor desarrollo humano con costos menores y objetivos más ambiciosos, donde no esté ausente la participación de los pobres mediante iniciativas que abran paso a la creatividad con apoyo de todos los estamentos sociales y creciente independencia del Estado. Se amplía así el campo de oportunidades con acciones que se integran en una faena colectiva de la gente que cambia un estado de conciencia marginal por otro de participación. Esto supone un compromiso de los sectores públicos y privados, de sus referentes económicos, políticos y culturales que abordan en común una posición solidaria abandonando egoísmos e indiferencias que caracterizan la situación actual.

La comprensible impotencia de los pobres para adoptar iniciativas hay que transformarla mediante políticas directas, no sólo en materia de salud y vivienda, sino facilitándoles posibilidades de capacitarse, entregándoles conocimientos básicos orientados con mayor fuerza hacia la juventud. La posibilidad de elevar

masivamente este nivel cultural y técnico, implica sacudir la marginalidad en tal forma que la gente encuentre canales para expresar sus anhelos y alcance objetivos mínimos en un poder descentralizado y participativo. Gobiernos centralizados limitan el horizonte social. Pero si el Estado se descentraliza entregando atribuciones a las comunidades de base, se empezará a comprobar la eficacia de nuevos circuitos de conexión entre el hombre común con toda la sociedad y sus centros rectores económicos, culturales y educativos.

En política moderna, reducir el tamaño del Estado no debe implicar abandonar programas sociales indispensables para compaginarlos racionalmente con ella, especialmente si esa reducción camina paralelamente con políticas descentralizadoras, hecho que hará multiplicar niveles de diálogos, estimular conductas consensuales y fortalecer la democracia en una dimensión nacional verdadera. En efecto, lo anterior convalida necesariamente el sistema democrático al verse ahora fortalecido con una activa participación que abre un espacio infinitamente mayor de diálogo para toda la comunidad.

En Chile el gobierno democrático ha desarrollado una política global que, junto con arrojar buenos resultados macroeconómicos, la ha compatibilizado con un programa social dinámico que permitirá sacar de la pobreza a un millón de personas durante el mandato del presidente Aylwin, de los cinco millones que heredó del régimen anterior. También se aplican mecanismos desconcentrados del poder, otorgando atribuciones a municipios y regiones que empiezan a compartir un poder autónomo descentralizado. Lo decimos sin jactancia y sólo para señalar el comienzo de un proceso para suplir carencias que demoraremos por lo menos toda esta década en superar. Se cumple de este modo lo ofrecido en la campaña que "con la democracia gana la gente".

El seminario que comentamos puede ser útil reproducirlo con algunas variantes en otras áreas de la región, interesando a amplios sectores de cada comunidad nacional para comprometerlos en la búsqueda conjunta de soluciones para toda la sociedad sin exclusión de ninguna especie. Es una iniciativa de progreso donde caben todos: gobernantes y gobernados, empresarios y sindicatos, personeros de la cultura y de la Iglesia, partidos e instituciones comunitarias, asumiendo todos, sin excepción, la calidad de constructores de una Patria más grande, más próspera y más justa.

(*) Embajador de Chile